

**PUBLICACIÓN:** The Ottawa Citizen  
**FECHA:** 2005.08.15  
**EDICIÓN:** Final  
**SECCIÓN:** News  
**PNAME:** Arguments  
**PÁGINA:** A11  
**COLUMNA:** David Zussman  
**FIRMA:** David Zussman  
**FUENTE:** Citizen Special  
**PALABRAS:** 899

---

## **Los diputados son los culpables de las faltas del gobierno**

---

A pesar del ambiente de vacaciones que se respira en Ottawa, se observa una intranquilidad creciente con respecto a la agenda política del gobierno para el otoño y a la respuesta prevista al informe de la Comisión Gomery anunciado para noviembre. Dado que ningún gobierno quiere parecer desprevenido ante los resultados y recomendaciones de cualquier investigación, ha florecido en Ottawa una pequeña industria que trata de adivinar lo que dirá el Juez John Gomery.

A fin de establecer el contexto para la respuesta del gobierno, debemos recordar que el Primer Ministro Paul Martin ordenó la investigación después del segundo informe de la Interventora General de Cuentas sobre el programa de patrocinio en 2003. En resumen, la Interventora concluía que este programa de \$250 millones no había sido objeto de la aplicación de los controles de gastos adecuados, y que un pequeño número de ejecutivos de empresas de publicidad habían aprovechado las debilidades del sistema para inflar el costo de sus servicios, y algunas veces, ni siquiera habían ofrecido los servicios.

La Comisión de Investigación Gomery realizó su primera audiencia pública el 21 de junio de 2004, y terminó sus actuaciones casi un año después, el 17 de junio de 2005. En total más de 136 días de declaraciones en los que se escucharon a más de 200 testigos. En este momento, se calcula que los costos directos de la investigación ascenderán casi \$100 millones. Las audiencias corroboraron en gran medida las conclusiones de la Interventora General de Cuentas y, además, revelaron que algunos de los ejecutivos de las empresas de publicidad implicadas en el programa de patrocinio habían hecho contribuciones financieras al ala quebequense del Partido Liberal.

Con todas estas pruebas a la vista, los canadienses estamos buscando respuestas a dos cuestiones. Primero ¿qué se debe hacer cuando contratistas del gobierno se aprovechan inadecuadamente de las debilidades de las prácticas contractuales y administrativas? Y segundo, una vez descubiertas las infracciones ¿quiénes deben rendir cuentas de las distintas acciones dentro de nuestro sistema parlamentario de gobierno?

Parece que nuestros tribunales penales van a brindarnos respuestas a la primera cuestión, pues están examinando casos contra varias empresas de publicidad y sus principales ejecutivos. Pero es la segunda cuestión, es la más problemática y más interesante, dado que está relacionada con las prácticas canadienses de administración pública fundamentales y abarca las complejas relaciones de rendición de cuentas entre el público, el Parlamento, los ministros y los funcionarios públicos.

Afortunadamente, un folleto publicado por la Escuela de Administración Pública de Canadá preparado por el profesor Peter Aucoin de la Universidad Dalhousie, y Mark Jarvis, funcionario del sector público, aporta algunas recomendaciones que aprovechan el nuevo régimen de rendición de cuentas adoptado por la administración pública federal en los dos últimos años.

Es importante observar que los funcionarios superiores de la administración pública están preocupados por la cuestión de la rendición de cuentas desde hace algún tiempo y han promovido tres publicaciones para remediar algunos de los muchos problemas señalados por la Comisión Gomery.

En la primera, *Guidance to Deputy Ministres*, se explican las responsabilidades de los viceministros y se brinda orientación a los funcionarios públicos. En la segunda, *Management Accountability Framework*, se establece lo que el público y el Parlamento esperan de los distintos ministerios. Y en la tercera, *Código de Valores y Ética de la Función Pública*, se describe lo que se espera de los distintos funcionarios.

Aucoin y Jarvis construyen sus argumentos en dichos cambios concentrándose en el rol del Parlamento en las cuestiones de rendición de cuentas. Sin hacer ninguna referencia directa a programa de patrocinio, los autores sugieren que la mayor debilidad en el régimen actual de rendición de cuentas es que los parlamentarios no están cumpliendo sus obligaciones de hacer que el gobierno rinda cuenta de sus acciones. En esencia, lo que argumentan es que la eficacia del sistema parlamentario de Westminster depende en gran parte de la robustez del escrutinio parlamentario para hacer que los ministros rindan cuentas, especialmente en lo que se refiere dar razón de lo que hacen.

Sostienen que es la falta de nuestros miembros del Parlamento, por no haber asumido su rol en la rendición de cuentas, lo que ha creado un régimen relativamente débil. Igualmente, observan que esta responsabilidad cae directamente sobre las espaldas de los diputados, pues los senadores, a diferencia de sus contrapartes australianos, no tienen legitimidad democrática para hacer que el gobierno rinda cuentas.

Sobre este punto, los autores no tienen mucha esperanza con respecto a la reforma en el Parlamento, dado que muy pocos diputados no valoran el rol esencial que han tenido tradicionalmente en la rendición de cuentas los diputados oficialistas sin cartera. Dado que Canadá tiene una larga tradición de gobiernos mayoritarios, en los cuales los diputados de los partidos de la oposición son poco numerosos y tienen poco personal a su servicio, no pareciera que ésta sea una solución posible.

El Juez Gomery comenzó su trabajo estudiando las actividades de unos pocos funcionarios públicos y empresas de publicidad que parecían haberse aprovechado de la apresurada implementación de la estrategia post-referéndum del Gobierno Federal en 1995. Es probable que al final haga recomendaciones que cuestionen la manera en que trabaja el Parlamento. Dada la importancia de este trabajo, es esencial que el Juez Gomery vaya más allá de las declaraciones no cuestionadas de los testigos y tome en consideración las medidas administrativas de largo alcance que se han estado implementando desde la publicación del informe general de la Interventora General de Cuentas.

En conclusión, Aucoin y Jarvis sostienen que la respuesta a la cuestión de quién es responsable de rendir cuentas de las distintas acciones probablemente se encuentre en la manera en que nuestro Parlamento no está funcionando actualmente.

David Zussman es profesor de administración en la Universidad de Ottawa y Comisario en la Comisión de la Administración Pública de Canadá a tiempo parcial.